



H. Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Manifiestar su rechazo a los nuevos despidos y desvinculaciones resueltos por el Poder Ejecutivo Nacional, que dejan sin empleo a miles de trabajadoras y trabajadores estatales.

Acompañar el reclamo de inmediata reincorporación de todos los despedidos y despedidas y ponerse a entera disposición de las medidas que resuelvan las y los trabajadores en pos de ese reclamo.

Christian Castillo
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca
Mónica Schlotthauer
Vanina Biasi

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El viernes 28 de febrero del corriente Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, lanzó una nueva oleada de miles de despidos, en su mayoría pertenecientes al área de Niñez y Adolescencia; de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Más tarde, la Dirección Nacional de Arquitectura y la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufrieron nuevos y masivos despidos.

En el caso de la la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como se constata en la denuncia que realizaron trabajadores y trabajadoras afectadas, ese viernes, cerca de las 23 horas y por mail, la cartera envió a miles de empleados y empleadas un texto que decía: “*Me dirijo a usted para informarle que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 151/25, a partir*

del 5 de marzo de 2025, quedará eximido/a de la obligación de asistir a su lugar de trabajo”. Y continúa: “En los próximos días le estaremos notificando formalmente los detalles sobre el período de disponibilidad que le corresponda”.

De acuerdo a la denuncia de ATE Desarrollo Social, se trata de más de más de 2 mil despidos y pases a disponibilidad en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF, ex Ministerio de Desarrollo Social).

Aunque gran parte de las y los empleados tienen más de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad, el Ejecutivo Nacional también aprovechó la modalidad de “contratados” de miles de trabajadores y trabajadoras para darlos de baja sin siquiera indemnización.

Además del impacto de esta decisión sobre miles de familias que dependen de esta fuente de ingresos, en el caso del Senaf la resolución del Poder Ejecutivo y por esa vía del Ministerio de Capital Humano tiene como resultado el avance en el desmantelamiento de políticas de atención a niñeces, adolescencias y sectores vulnerados y golpeados por el brutal ajuste que implementa el gobierno nacional, profundizando las desigualdades.

También tiene como resultado el ataque directo a un área que es responsable de garantizar los derechos que atañen a las infancias y juventudes, de acuerdo a lo establecido en la Convención de los derechos del niño -con rango constitucional- en materias como el del abuso sexual o la salud mental, en un contexto de aumento de la pobreza y la indigencia en estos sectores así como también en un contexto de aumento de la tasa de suicidios, violencia familiar e institucional, entre otras cuestiones muy importantes.

Esta política se repite, nuevamente, en otras dependencias del Estado. En efecto, luego de los despidos en el Senaf, 400 trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y de la Dirección Nacional de Arquitectura fueron despedidos, ese mismo fin de semana.

La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) también fue alcanzada por una nueva tanda de despidos, con cifras que rondarían los 300 trabajadores desvinculados. En este caso, sus trabajadoras y trabajadores alertan que con ello podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo, que ya se veían afectadas por el congelamiento presupuestario desde 2023. El resultado, nuevamente, impactará sobre los sectores más vulnerables, como la población que habita en Villa Inflamable y otros sectores que viven en barrios no urbanizados y completamente contaminados.

Finalmente, destacamos que estos despidos se suman a los que ocurrieron a comienzos de enero en la Secretaría de Derechos Humanos, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, y a los que ocurrieron en febrero en el Ministerio de Salud, afectando a trabajadores de esta cartera como a los hospitales Laura Bonaparte, Posadas y Sommer, en General Rodríguez.

Pero esa es sólo la última tanda. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hubo ya 37.595 despidos en el Estado nacional a lo largo de 2024. En lo que va de 2025, los despidos y desvinculaciones avanzan mes a mes, en diferentes áreas.

La eliminación de programas de asistencia, la reducción del presupuesto en educación y salud, y ahora el recorte masivo de personal en sectores sensibles como Desarrollo social y Hábitat ponen en riesgo el acceso a derechos esenciales para miles de personas.

En este contexto, organizaciones y gremios anticipan nuevas medidas de protesta ante lo que consideran una política de ajuste que profundiza la crisis económica y social en Argentina.

Los abajo firmantes rechazamos por ello la decisión del PEN y nos ponemos a entera disposición de la lucha por la reincorporación de todas y todos los despedidos.